

LA CRISIS DEL CAPITALISMO SE PROFUNDIZA

La situación económica, política y social de nuestro país muestra, cada vez más, la profundización de la crisis cuyas salidas, planteadas desde el gobierno y los empresarios, apuntan a que la paguen los trabajadores y el pueblo en general.

Lo anterior se corrobora, en lo económico, con el crecimiento del desempleo y el subempleo, como consecuencia del decrecimiento de la industria (-9%). El sector manufacturero fue el que más disminución de empleos tuvo (4.9%), según informe de la Dirección Nacional de Planeación DNP. La deuda externa alcanza los 90.589 millones de dólares que equivale al 24.5% del PIB. Los únicos sectores que crecieron fueron: el de la construcción, el financiero y el narcotráfico.

El gobierno de Juan Manuel Santos sigue favoreciendo el parasitismo; y como consecuencia, esa oligarquía arremete contra los derechos de los trabajadores y el pueblo. Los beneficiarios directos son un reducido grupo de monopolistas colombianos, aunque las mayores ganancias se las lleva el capital transnacional, bien remunerado con los altos intereses.

Por otra parte, la industria minero-



energética saquea sin control y destruye el medio ambiente, mientras burla impuestos sin crear nuevos puestos de trabajo, extendiendo la miseria, el desempleo y las enfermedades. Esta situación económica muestra la debilidad del gobierno y el fracaso de la política neoliberal.

El paradigma neoliberal que guía al Estado colombiano y las clases dominantes en el departamento de Antioquia muestra, de conjunto, la aplicación y desarrollo de una gama de políticas y proyectos dirigidos a instalar la economía antioqueña en el ámbito internacional a través de plataformas competitivas y flexibles, proveedoras de bienes y servicios especializados. Los programas y planes de desarrollo aprobados por

cada uno de los gobiernos del departamento y de los municipios que lo conforman, han apuntado al despliegue de la política neoliberal, lo que da a estos gobiernos una caracterización de neoliberales.

La crisis política de los partidos tradicionales en el poder se agudiza; el desprestigio del gobierno y del régimen se evidencia en las múltiples protestas de los trabajadores y el pueblo, en las elecciones al Congreso de la República el pasado 9 de marzo.- Si bien el 84.5% de la votación por listas o corrientes correspondió a los partidos tradicionales, gracias a la reforma política, al terrorismo de Estado y la ausencia de garantías para la oposición, la inconformidad se manifestó en el 57% de abstención (en Antioquia superó el 60%), en el 6% de votación en blanco, en los demasiados

tarjetones **nulos** y **no marcados** para las dos cámaras. Además, la campaña electoral, como es costumbre, estuvo plagada de compra de votos, clientelismo, influencia de grupos paramilitares y ausencia de garantías para los movimientos y partidos minoritarios y de oposición.

Después de elegido el Congreso, la ONG "Paz y Reconciliación", hizo la denuncia de que 70 congresistas elegidos tienen nexos con el paramilitarismo, de los cuales 33 son senadores y 37 representantes a la Cámara, pertenecientes a los partidos tradicionales, lo cual expresa la continuidad del paramilitarismo en este espacio. La mayoría del Congreso elegido, y las tendencias ideológicas en su interior, se reafirman en la defensa de las políticas guerreristas y de sometimiento de las fuerzas populares.

LAS RESPUESTAS DEL MOVIMIENTO POPULAR



A la par de esta situación, también se advierten condiciones para aumentar la acumulación de fuerzas de oposición, mediante la denuncia de las prácticas nefastas contra el pueblo, como la antidemocracia, el terrorismo de Estado y la violación a los derechos humanos; el fortalecimiento del rechazo al ilegítimo Congreso, la campaña del voto en blanco hacia las presidenciales, la promoción de la

Asamblea Nacional Constituyente y la necesidad de un gobierno democrático y popular.

La tendencia de ascenso del movimiento de masas se evidencia en: las múltiples protestas desarrolladas en el 2013, que causaron un descenso

en la popularidad del gobierno de Santos, una crisis ministerial y en la cúpula de las fuerzas armadas; en la exitosa cumbre nacional agraria, étnica y popular, realizada a solo 8 días de las primeras elecciones del 2014, de la cual salió un pliego único de peticiones y se le dio un plazo perentorio al gobierno de SANTOS para el cumplimiento de los acuerdos firmados y la negociación del pliego, o someterse a una ola de protestas y paros como las realizadas en 2013.

A lo anterior se sumala inconformidad de las a masas de Bogotá ante la agresión fascista del Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez, el Presidente de la República y candidato a la reelección Juan Manuel Santos, los grupos económicos y partidos políticos de la derecha que apoyan el desconocimiento del derecho político a elegir y ser elegido y, por esa vía, desconocer el voto popular que eligió a Gustavo Petro Urrego como Alcalde de Bogotá, lo



que amerita trabajar por la unidad política y asumir la movilización como expresión de nuestra participación en la lucha política por el poder y alternativa de gobierno del pueblo y para el pueblo. Igualmente, se revela la inconformidad ante la mala calidad y altas tarifas de los servicios públicos domiciliarios, el impuesto predial y el alto costo de la canasta familiar.

La protesta, la movilización y la lucha social y política siguen siendo las herramientas fundamentales de los trabajadores y el pueblo para mostrar el descontento con este régimen excluyente y explotador y exigir los cambios estructurales que se necesitan para mejorar sus condiciones de vida y de existencia económica y material.

Para mejorar la calidad de vida se exige: más y mejores viviendas, empleo productivo digno, educación, salud, energía, agua potable, acueducto, alcantarillado, protección del medio ambiente, recreación, obras de

impacto social, infraestructura e inversión social.

La correlación de fuerzas tiende al logro de cambios a favor del interés popular. Las formas organizativas progresistas, democráticas, de izquierda y revolucionarias, con la lucha y la movilización al centro, ayudan a fortalecer el Movimiento de Oposición al Régimen -MOR- para confrontar y deslegitimar al gobierno de Santos.

Es necesario canalizar la inconformidad, y propiciar alguna forma organizativa, de miles de trabajadores que salen a protestar por las altas

tarifas de los servicios públicos, de las víctimas de la violencia estatal, de los desplazados indefensos, de los despedidos, de los tercerizados, etc.

Reiteramos que estamos por el Paro Cívico Nacional -PCN-, sobre la base del trabajarlo con y desde las bases sociales, comprometiéndonos con el paro de la producción y el transporte. El movimiento sindical, indígena, agrario y popular debe ser de tal contundencia que nos permita echar atrás medidas antipopulares y frenar proyectos de ley en los cuales insiste el antidemocrático gobierno de Juan Manuel Santos.

SITUACIÓN DEL SINDICALISMO

Desde hace varias décadas el sindicalismo atraviesa por una crisis, causada por el terrorismo de estado, la flexibilización laboral, la desideologización de los trabajadores y la cooptación por parte del establecimiento de varios dirigentes sindicales.

El conjunto de los trabajadores organizados en sindicatos debemos implementar una ofensiva para ayudar a superar los obstáculos y retomar el papel en la lucha social y política; así mismo, lograr que los sectores sociales que hoy están privilegiando la contienda electoral, asuman esta forma de lucha con la bandera de la movilización social y

política para enfrentar el régimen y actual gobierno.

Desde nuestra posición clasista debemos trabajar por afirmar la independencia de clase respecto a las políticas de los patronos y el gobierno, sin olvidar que la unidad de acción



debe estar orientada a la defensa de los derechos de los trabajadores, al impulso de la organización y la movilización.

En ese orden de ideas, es importante señalar el valioso apoyo que los dirigentes sindicales clasistas debemos brindar a las tareas de promoción e impulso de un frente político amplio y de masas que unificadamente enfrente la fascistización, el neoliberalismo, las violaciones constantes de la soberanía nacional y todas aquellas políticas que atentan contra el bienestar, las libertades y derechos de las masas. Avanzar en el fortalecimiento de la oposición política al régimen y el gobierno de turno constituye una tarea de múltiples iniciativas y esfuerzos.

Uno de los retos fundamentales que hoy tiene el sindicalismo es el de perfilarse como opción organizativa de los trabajadores-as, pero para ello requiere adquirir una identidad de clase que lo proyecte, generando propuestas alternativas en lo laboral, lo social, lo económico y lo político, integrando en su plataforma de lucha a la comunidad afectada por las políticas de los capitalistas, patronos y gobierno.

Para ello, debe superar las dificultades internas, sus divisiones y las visiones diferentes que se perfilan desde sus propias organizaciones; eliminar rotundamente fenómenos y prácticas sindicales que le hacen daño

a los intereses de la colectividad y al movimiento en general, tales como el burocratismo, el clientelismo, el anarco-sindicalismo, el inmovilismo, el sectarismo, la improvisación y la corrupción en el manejo de sus propios recursos.

Los dirigentes sindicales tienen también unos retos para contribuir a la superación de la crisis:

Ligarnos más a las masas para interpretar mejor sus intereses, independencia política frente al patrón, manejo ordenado y transparente (planificación, control y evaluación) de la organización sindical o social, formación sindical y política de las masas, priorizar la movilización (preparándola) como herramienta fundamental de lucha por encima de jurídica y electoral.

ADIDA como organización sindical está inmersa como muchas otras en la crisis que afecta el sindicalismo. Hay unas causas externas que son comunes a todos los sindicatos cuyos responsables son el régimen y el gobierno y otras internas en la cual tiene responsabilidad la dirigencia sindical. Haremos referencia a las internas:

El abandono por parte de algunos dirigentes sindicales de los principios de clase (independencia frente al Estado y patronos, democracia sindical, la unidad en la acción, solidaridad de clase entre otros); la práctica de vicios como: el inmovilismo, gremia-

lismo, burocratismo, el sectarismo, la improvisación, la violación de los estatutos y la democracia sindical, el desorden administrativo de los sindicatos y hasta el desgüeño financiero de sus recursos con grados de corrupción.

Falta de respuestas oportunas y contundentes a las demandas del magisterio; incumplimiento en la ejecución de mandatos de instancias democráticas como la asamblea de delegados y la Junta Directiva; priorización de intereses personales y de grupo por encima de los generales y colectivos; falta de formación sindical y política de las bases magisteriales.

La actual dirección de ADIDA conformada por un acuerdo mayoritario de 6 directivos y uno minoritario de 5 directivos, tiene diferencias

frente a cómo dirigir nuestra organización, sindical. Mientras el acuerdo minoritario enfatizamos en eliminar el sectarismo y dar participación democrática en los diferentes espacios a todos los representantes de la organización, los 6 directivos del acuerdo mayoritario, siguen empeñados en el veto al uso de éstos, a quienes no están políticamente con ellos. Si queremos fortalecer nuestra organización sindical en estos momentos de crisis se tiene que eliminar todos estos vicios donde los más afectados son los afiliados a ADIDA.

Seguiremos insistiendo en la democratización de los espacios y recursos de ADIDA, los cuales son de todos los asociados y no de un grupo de directivos

NUESTRAS PROPUESTAS DE SALIDA A LA CRISIS

En el marco de lo expuesto, el movimiento sindical está obligado a hacer su aporte a la lucha económica y política general que debe librar todo el pueblo. Partimos de insistir en que no hay salida sin un ataque decisivo al capital, porque la crisis exige, para defender los intereses de los trabajadores y el pueblo, prohibición de despidos, de remates de viviendas y fincas por hipotecas bancarias; la nacionalización de la banca, de las principales empresas y de nuestros



recursos naturales; y el monopolio estatal del comercio exterior.

Enfrentar la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas, defender la soberanía nacional de los embates extranjeros y, por su puesto, luchar por los espacios y libertades democráticas, comprenden tareas fundamentales para enfrentar el salvataje planteado por la burguesía y sus acólitos, que beneficia la concentración y centralización del capital en cada vez menos magnates y pulpos financieros.

En lo laboral y lo social estamos por:

- Derogatoria de la Ley 789 de 2002, sobre reforma laboral.
- Derogatoria de la Ley 100 de 1993 y con ella la intermediación en salud.
- Eliminación de la intermediación laboral, las empresas temporales y cooperativas de trabajo asociado, fortaleciendo <la contratación directa.
- Lucha por el empleo digno, que implica alza general de salarios, garantía a la estabilidad laboral y a los derechos prestacionales de los trabajadores colombianos.
- Derogatoria del acto legislativo 01

del 2005, así como de todas aquellas leyes y decretos que afecten el derecho de los trabajadores a pensionarse.

- Nacionalización de los recursos e instituciones de la seguridad social en salud y pensiones, con el establecimiento de un sistema de salud integral, sin limitaciones para todos los colombianos, cuya financiación, dirección y control esté a cargo del Estado; eliminación los fondos privados de pensiones, estableciendo como régimen único, a cargo del Estado, el de “prima media con prestación definida”.
- Respeto a los derechos de negociación, contratación colectiva y huelga de los trabajadores; eliminación de las leyes y decretos que limitan y hacen ineficaz el ejercicio de estos derechos.
- No a la penalización y criminalización de la protesta social.
- No a la penalización y criminalización de la protesta social.
- Protección a las víctimas de la guerra sucia, respeto a su derecho a la verdad, justicia y reparación plena, apertura democrática para el pueblo.

- Lucha por el acuerdo humanitario y por la paz con justicia social.
- Por la refinanciación del FNPSM.
- Por un estatuto docente que dignifique la profesión.
- Por una salud de calidad y oportuna para el magisterio y sus familias.
- Por el ascenso directo por título para los educadores del 1278.

En lo educativo:

- Por una ley estatutaria de la educación que la conciba como un derecho fundamental financiado directamente por el Estado.

GONZALO HOYOS ALZATE
Vicepresidente de ADIDA

NOEMY TAMAYO MARÍN
Secretaria de la Mujer y la Familia

TARSICIO RIVERA MUÑOZ
Ejecutivo de la CUT Nacional

OVER DORADO CARDONA
Ejecutivo de FECODE

SERGIO ECHEVERRI D.
Comité Prest. Sociales Río Negro

DANILO PULGARÍN HENAO
Ejecutivo CUT Antioquia

AUGUSTO HERNÁNDEZ C.
DDHH Río Negro

TRINA CHAVARRIA CH.
Ejecutiva CUT Antioquia

CARLOS MARIO A.
Comité Capacitación Río Negro

OCTAVIO GIRALDO
Quejas y Reclamos CUT Antioquia

JUAN GUILLERMO MONTOYA
Veedor de Salud Bello

CLODULFO SÁNCHEZ, RONAL DOMINGUEZ, FEDERMAN MARTÍNEZ F.
Integrantes del Coordinador Departamental del EMLFV

Abril de 2014.